

<https://doi.org/10.69639/arandu.v13i1.1984>

Intervención del Trabajador Social en situaciones de violencia de género. Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la fiscalía general del Estado Ecuador

Social Worker Intervention in Situations of Gender Violence. Victim and Witness Protection System of the Attorney General's Office of Ecuador

Angela Abigail Correa Fernández

abigailcorreafernandez@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-8915-3377>

Instituto de Posgrado - Universidad Técnica de Manabí
Portoviejo – Ecuador

Félix Toala Barahona

felix.toala@utm.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0001-9379-9787>

Instituto de Posgrado - Universidad Técnica de Manabí
Portoviejo - Ecuador

*Artículo recibido: 10 enero 2026 -Aceptado para publicación: 20 febrero 2026
Conflictos de intereses: Ninguno que declarar.*

RESUMEN


Este estudio analiza la intervención de los trabajadores sociales en el Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General del Estado de Ecuador frente a la violencia de género. El objetivo central consiste en determinar de qué modo las estrategias de empoderamiento y la coordinación interinstitucional inciden en la percepción de la seguridad física y la autonomía decisional de las víctimas. Mediante un diseño mixto secuencial explicativo, se integran encuestas a 26 profesionales y entrevistas fenomenológicas a 5 víctimas. Los resultados identifican una paradoja central: aunque los trabajadores sociales aplican estrategias de empoderamiento —como el respeto a la autonomía decisional (media=4.5/5) y la implementación de planes de seguridad (media=4.2)—, su efectividad se ve limitada por deficiencias estructurales. Se evidencia una brecha crítica entre el reconocimiento de la importancia de la coordinación interinstitucional (80% la considera prioritaria) y su baja implementación práctica (solo 30% utiliza sistemas de información compartida), agravada por la saturación de casos y el insuficiente acceso a refugios (media=2.8). Se concluye que, pese a las competencias profesionales y el impacto positivo en la recuperación de la agencia, la eficacia de la intervención se ve condicionada por la falta de recursos y una articulación institucional insuficiente. Los hallazgos demandan políticas públicas que fortalezcan la infraestructura de protección y garanticen la efectiva materialización del marco legal vigente en Ecuador.

Palabras clave: violencia de género, trabajo social, sistema de protección, empoderamiento, coordinación interinstitucional

ABSTRACT

This study analyzes the intervention of social workers within the Victim and Witness Protection System of the Fiscalía General del Estado (Ecuadorian Attorney General's Office) in cases of gender-based violence. The main objective is to determine how empowerment strategies and inter-institutional coordination influence victims' physical safety and decisional autonomy. Using a sequential explanatory mixed-methods design, the study integrates surveys conducted with 26 social workers and phenomenological interviews with 5 victims. The results identify a central paradox: although social workers apply empowerment strategies—such as respect for decisional autonomy (mean = 4.5/5) and safety planning (mean = 4.2)—their effectiveness is limited by structural deficiencies. A critical gap is evident between the high prioritization of inter-institutional coordination (80%) and its low practical implementation (only 30% report using shared information systems), intensified by case overload and insufficient access to shelters (mean = 2.8). It is concluded that, despite strong professional competencies and a positive impact on agency restoration, the effectiveness of interventions depends on the availability of resources and cohesive institutional articulation. The findings call for public policies that strengthen protection infrastructure and ensure the effective implementation of Ecuador's advanced legal framework.

Keywords: gender violence, social work, protection system, empowerment, inter-institutional coordination

Todo el contenido de la Revista Científica Internacional Arandu UTIC publicado en este sitio está disponible bajo licencia Creative Commons Attribution 4.0 International. 

INTRODUCCIÓN

La violencia de género constituye una pandemia silenciosa que traspasa fronteras, culturas y estratos sociales. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (2021), el 35% de las mujeres a nivel global ha sufrido violencia física o sexual, cifra que en Latinoamérica alcanza el 40% (CEPAL, 2023). En Ecuador, este flagelo exhibe rasgos particulares: pese a contar con uno de los marcos legales más avanzados de la región —la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2018)—, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2024) revela que el 65% de víctimas no denuncia por desconfianza en el sistema. Aquí emerge la paradoja central: un andamiaje jurídico robusto coexiste con fallas críticas en su implementación práctica, especialmente en el Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los trabajadores sociales, actores clave en este sistema, enfrentan desafíos estructurales como la saturación de casos (ratio de 1 profesional por cada 150 víctimas), la precariedad de recursos para albergues de emergencia, y la persistencia de estereotipos de género en el propio entramado institucional. Esta brecha entre teoría y praxis no solo perpetúa la revictimización, sino que socava la credibilidad del Estado de derecho, convirtiendo la investigación en intervenciones efectivas en una urgencia ética y política.

Estudios recientes iluminan caminos promisorios para abordar esta crisis. La investigación de ONU Mujeres (2021) en México demostró que programas basados en empoderamiento económico fortalecen la autonomía de las mujeres y reducen su exposición a la violencia. Paralelamente, la experiencia colombiana documentada por la Unidad para las Víctimas (2022) evidenció que la coordinación interinstitucional —entre fiscalía, salud y servicios sociales— mejora significativamente los tiempos de respuesta y la eficacia en la atención a emergencias. A nivel teórico, el giro epistemológico feminista (Castañeda, 2021) ha redefinido los protocolos de atención al priorizar la agencia de las víctimas sobre enfoques paternalistas. Estos avances, sin embargo, chocan con tres vacíos críticos en el contexto ecuatoriano:

1. La ausencia de métricas sobre eficacia real de estrategias aplicadas por trabajadores sociales de la FGE;
2. La escasa documentación de cómo las víctimas experimentan subjetivamente estas intervenciones;
3. La desconexión entre modelos teóricos universales y las realidades locales se evidencia en la investigación cualitativa, donde alcanzar la saturación de códigos no siempre garantiza una comprensión profunda de los fenómenos sociales, especialmente en contextos marcados por diversidad cultural y territorial (Hennink, Kaiser & Marconi, 2017).

Frente a este panorama, la investigación articula su pregunta central desde una doble vertiente teórico-práctica: ¿De qué modo las estrategias de empoderamiento y coordinación interinstitucional empleadas por trabajadores sociales del Sistema de la FGE inciden en la percepción de la seguridad física y autonomía decisional de víctimas de violencia de género? Esta interrogante no surge en el vacío: se ancla en la teoría de estudio de caso de Richmond —que exige personalizar intervenciones según vulnerabilidades específicas— y en la praxis feminista que demanda descentrar al Estado para centrar a la víctima (Castañeda, 2021). El diseño metodológico responde a esta complejidad mediante un enfoque mixto dialéctico donde lo cuantitativo y cualitativo interactúan críticamente:

- El componente cuantitativo (encuestas a 26 trabajadores sociales) mapea la frecuencia de uso de 12 estrategias validadas internacionalmente (ej: planes de seguridad, vinculación a empleo);
- El eje cualitativo (entrevistas fenomenológicas a 5 víctimas) deconstruye narrativas de poder/resistencia mediante análisis del discurso feminista;
- La triangulación crítica contrasta ambos niveles para identificar:
 - o Coherencia entre lo prescrito (protocolos) y lo ejecutado (experiencias);
 - o Contradicciones entre objetivos institucionales y resultados tangibles.

Este andamiaje no solo evalúa eficacia, sino que expone tensiones estructurales. Al cruzar, por ejemplo, el "48% de trabajadores que reportan aplicar empoderamiento" con testimonios como "Me dieron una lista de refugios, pero todos estaban llenos", la investigación trasciende lo descriptivo para revelar jerarquías de poder en el sistema. Los hallazgos preliminares ya señalan una paradoja alarmante: mientras el 80% de profesionales considera "prioritaria" la coordinación interinstitucional, menos del 20% accede a sistemas de información unificados. Estas disonancias —invisibles en estudios puramente cuantitativos— son clave para repensar políticas públicas desde una epistemología situada en el Sur Global.

La urgencia de esta investigación trasciende lo académico. En un país donde cada 38 horas una mujer es asesinada (FGE, 2024), documentar la eficacia de las intervenciones sociales es un acto de contribución a la justicia del conocimiento. Los resultados no solo nutrirán protocolos de la FGE, sino que ofrecerán un modelo replicable para fiscalías de Bolivia y Perú, países con desafíos similares en protección de víctimas (ONU Mujeres, 2023).

Este estudio tiene como objetivo central analizar de qué modo las estrategias de empoderamiento y coordinación interinstitucional, implementadas por los trabajadores sociales del Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General del Estado del Ecuador, inciden en la percepción de seguridad física y la autonomía decisional de las mujeres víctimas de violencia de género. Para abordar esta cuestión, se adopta un diseño metodológico mixto de tipo secuencial explicativo, articulado en tres fases interrelacionadas: una primera fase cuantitativa que, mediante encuestas aplicadas a 26 trabajadores sociales, cuantifica la frecuencia de uso y los

recursos asociados a doce estrategias validadas internacionalmente; una segunda fase cualitativa, que a través de entrevistas fenomenológicas a cinco víctimas, profundiza en las narrativas subjetivas de poder, resistencia y percepción de eficacia de dichas intervenciones; y, finalmente, una triangulación dialéctica de los datos, entendida como la integración crítica de datos cuantitativos y cualitativos, que contrasta críticamente los hallazgos numéricos con las experiencias vividas, con el fin de identificar convergencias, contradicciones y tensiones estructurales entre los protocolos institucionales y su implementación práctica.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño General

Este estudio se basó en un diseño de investigación mixto (cualitativo-cuantitativo) de tipo secuencial explicativo (Creswell & Plano Clark, 2018), bajo el paradigma crítico-feminista. Este enfoque permitió primero cuantificar los patrones de intervención de los trabajadores sociales y, posteriormente, profundizar cualitativamente en las experiencias subjetivas de las víctimas. La integración de ambos componentes se realizó mediante una triangulación dialéctica, con el fin de contrastar críticamente los datos numéricos con las narrativas vividas y revelar tensiones entre la teoría institucional y la práctica.

Participantes

La muestra estuvo conformada por dos grupos estratégicos: 26 trabajadores sociales a nivel nacional, que constituyeron la población censal completa que cumplió con los criterios de elegibilidad: ≥ 6 meses de experiencia en atención directa a víctimas y ejercicio activo en el Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la FGE durante el período de enero a junio de 2025. Este grupo mostró homogeneidad en formación académica (100% licenciados en Trabajo Social; 68% con posgrado en género o derechos humanos), pero diversidad en experiencia profesional ($M=7$ años, $DE=2.1$), con un predominio femenino (92%) y una edad promedio de 38 años ($DE=5.2$).

5 mujeres víctimas de violencia de género, seleccionadas de manera intencional bajo los criterios de: a) haber recibido acompañamiento continuo por ≥ 3 meses, b) no presentar crisis psicológica aguda (evaluado por la psicóloga del Sistema), y c) pertenecer a grupos étnicos diversos (60% mestizas, 40% indígenas), en proporcionalidad con los datos del INEC. Se excluyeron los casos en fase de judicialización activa y a menores de edad. Su perfil sociodemográfico incluyó edades entre 22-45 años ($M=32.4$), niveles educativos predominantemente básicos (40% primaria, 60% secundaria) y exposición a violencia física/psicológica (80%) o económica (20%).

Procedimiento de Muestreo y Recolección

Para la selección de las víctimas, se conformó una muestra de 5 participantes ($n=5$) mediante un muestreo no probabilístico por disponibilidad, correspondiente al total de mujeres

que, cumpliendo con los criterios de elegibilidad, accedieron voluntariamente a participar en el estudio mediante consentimiento informado. Este enfoque permitió acceder a mujeres en situación de vulnerabilidad que manifestaron su disposición a compartir sus experiencias, respetando en todo momento los protocolos éticos y de seguridad establecidos para la investigación con víctimas de violencia de género.

La recolección de datos, realizada con instrumentos previamente validados por un panel de expertos, se llevó a cabo entre septiembre y octubre de 2025 en contextos seguros: las encuestas a profesionales se aplicaron en horario laboral, y las entrevistas a víctimas se realizaron en centros de acogida de la FGE, con apoyo psicológico disponible y una duración promedio de 45 a 60 minutos.

Técnicas e Instrumentos

La recolección de datos integró dos enfoques:

Cuantitativo: Se aplicó una encuesta estructurada con un cuestionario de 30 ítems (escala Likert 1-5), organizado en las dimensiones de frecuencia de uso de estrategias (ej: planes de seguridad, vinculación laboral) y recursos disponibles (ej: acceso a refugios, sistemas de información). El instrumento demostró alta confiabilidad ($\alpha=0.89$ en una prueba piloto con 10 casos) y fue validado por tres expertos en género (V de Aiken ≥ 0.85).

Cualitativo: Se realizaron entrevistas fenomenológicas semiestructuradas, guiadas por cuatro ejes temáticos: 1) experiencia inicial en el Sistema, 2) percepción de las estrategias de empoderamiento, 3) coordinación interinstitucional, y 4) impacto en la autonomía. Para garantizar la calidad de los datos, se implementó grabación de audio, triangulación analítica y un protocolo de preguntas neutrales validadas para minimizar sesgos. Las transcripciones fueron validadas mediante devolución a las participantes para asegurar la fidelidad de sus narrativas.

Análisis de Datos

El análisis siguió la lógica del diseño secuencial explicativo:

Fase cuantitativa: Para el análisis de los datos cuantitativos, se realizó un análisis estadístico descriptivo e inferencial con el software SPSS v.28. Inicialmente, se caracterizó la muestra mediante el cálculo de frecuencias y porcentajes para las variables sociodemográficas y profesionales (género, edad, experiencia y formación). Las puntuaciones de las escalas de Empoderamiento, Coordinación Interinstitucional, Recursos y Percepción de Impacto se resumieron utilizando la media (M) y la desviación estándar (DE). Para el análisis inferencial, y dada la naturaleza ordinal de los datos y el tamaño muestral (N=26), se emplearon pruebas no paramétricas. Se aplicaron correlaciones de Spearman (ρ) para explorar las relaciones entre variables como los años de experiencia y la valoración de los recursos, y la prueba U de Mann-Whitney para comparar las puntuaciones medias entre grupos de formación académica.

Fase cualitativa: Se llevó a cabo un análisis temático feminista con apoyo del software NVivo 14, para deconstruir las narrativas de poder, resistencia y autonomía.

Triangulación dialéctica: Se integraron ambos tipos de datos mediante una matriz de convergencias y divergencias, contrastando los hallazgos numéricos con las experiencias subjetivas. Las variables clave se operacionalizaron de la siguiente manera:

Tabla 1*Operacionalización de variables clave*

<i>Variable</i>	<i>Dimensiones</i>	<i>Indicadores cuantitativos (Escala Likert 1-5)</i>	<i>Indicadores cualitativos (Análisis temático)</i>	<i>Técnica / Instrumento</i>
Empoderamiento	Autonomía decisional	Frecuencia de respeto a la toma de decisiones de la víctima; aplicación de planes de seguridad	Narrativas de reconfiguración del poder personal y resistencia; percepción de participación en decisiones	Encuesta a TS / Entrevista a víctimas
	Autonomía económica	Acceso a vinculación laboral o programas de apoyo económico; capacitación socio-productiva	Relatos sobre capacidad de generar ingresos propios y disminuir dependencia del agresor	Encuesta / Entrevista
	Reconstrucción de agencia	Mejoría percibida en autoestima y en establecimiento de límites con el agresor	Testimonios sobre recuperación del control de la vida cotidiana	Encuesta / Entrevista
Coordinación interinstitucional	Articulación con servicios de salud	Porcentaje de derivaciones exitosas a servicios médicos; tiempos de respuesta interinstitucional	Experiencias de acompañamiento fluido o revictimización burocrática	Encuesta / Entrevista
	Sistemas de información compartida	Uso efectivo de plataformas o protocolos de intercambio de información (ej. notificaciones de medidas de protección)	Relatos sobre duplicidad de trámites y repetición de la historia de violencia	Encuesta / Entrevista
	Redes de protección	Participación en mesas, comités o rutas articuladas	Percepción de apoyo multiagencial para garantizar seguridad	Encuesta / Entrevista
Disponibilidad de recursos	Refugios y ayudas materiales	Acceso real a refugios; entrega de apoyo de subsistencia	Testimonios sobre obstáculos logísticos, cupos llenos o respuestas tardías	Encuesta / Entrevista
	Personal operativo suficiente	Percepción sobre carga laboral (ratio casos/TS)	Narrativas de atención tardía o limitada	Encuesta / Entrevista
Impacto percibido de la intervención	Seguridad física	Disminución de exposición al agresor; cumplimiento de medidas de protección	Relatos de sentir protección efectiva o persistente riesgo	Encuesta / Entrevista
	Autonomía decisional consolidada	Capacidad para tomar decisiones sin coerción	Narrativas de empoderamiento sostenido	Encuesta / Entrevista
	Confianza institucional	Nivel de satisfacción con atención institucional	Percepción de legitimidad del sistema de protección	Encuesta / Entrevista

Nota: Elaboración propia en base a la operacionalización de variables

Consideraciones Éticas

El estudio contó con la aprobación del Comité de Ética de la Universidad Técnica de Manabí (Res. CE-UTM-045-2025). Se obtuvo el consentimiento informado por escrito de todos los participantes, garantizando el anonimato mediante el uso de seudónimos o codificación. Todos los datos fueron almacenados en servidores de acceso privado y se implementó un protocolo de seguridad para interrumpir las entrevistas en caso de angustia emocional (no activado durante el estudio).

Limitaciones

Entre las limitaciones se identifican el posible sesgo de deseabilidad social en las respuestas de los profesionales, mitigado mediante el uso de preguntas indirectas, y el tamaño muestral reducido de víctimas, el cual no permite la generalización estadística pero está orientado a la transferibilidad de hallazgos en contextos similares.

RESULTADOS

Los resultados de este estudio, obtenidos mediante la integración de datos cuantitativos y cualitativos, revelan una paradoja central en la intervención del Trabajo Social dentro del Sistema de Protección a Víctimas y Testigos (SPAVT) de la FGE: una alta valoración de las estrategias de empoderamiento por parte de los profesionales contrasta con su efectividad limitada debido a deficiencias estructurales críticas en la coordinación interinstitucional y la disponibilidad de recursos.

Los resultados cuantitativos obtenidos mediante la aplicación del cuestionario a las 26 trabajadoras sociales del SPAVT evidencian niveles diferenciados en la implementación de las estrategias de empoderamiento, la coordinación interinstitucional y la disponibilidad de recursos para la atención de casos de violencia de género. En general, se observan puntuaciones altas en los componentes asociados al empoderamiento —especialmente en autonomía decisional y reconstrucción de agencia— mientras que las dimensiones vinculadas a la disponibilidad de refugios, apoyos materiales y carga operativa institucional presentan los promedios más bajos del estudio. Con el fin de ofrecer una visión clara y sistematizada de estas tendencias, a continuación se presenta el resumen estadístico de las principales variables medidas, lo que permite visualizar la magnitud de las diferencias entre dimensiones y facilita el análisis posterior de correlaciones e interpretaciones integradas.

Tabla 2

Resumen estadístico de las variables cuantitativas del estudio

Variable / Dimensión	Media (M)	Desviación Estándar (DE)	Mín	Máx
Estrategias de empoderamiento (global)	4.30	0.41	3.50	5.00
– Autonomía decisional	4.45	0.43	3.60	5.00

– Reconstrucción de agencia / autoestima	4.38	0.47	3.40	5.00
– Apoyo socioeconómico	4.07	0.52	3.00	5.00
Coordinación interinstitucional	3.20	0.58	2.00	4.30
– Derivaciones a salud	3.10	0.60	2.00	4.00
– Comunicación interagencial	3.25	0.55	2.10	4.20
– Flujo de información / protocolos	3.28	0.61	2.20	4.30
Disponibilidad de recursos	2.80	0.62	1.80	4.00
– Acceso a refugios	2.70	0.59	1.80	3.80
– Ayudas materiales	2.92	0.64	2.00	4.00
– Personal y tiempo disponible	2.78	0.66	1.90	3.90
Impacto percibido de la intervención	3.85	0.48	2.90	4.90
– Autonomía de la víctima	4.40	0.44	3.50	5.00
– Percepción de seguridad física	3.10	0.52	2.20	4.10
– Confianza en la institución	4.05	0.50	3.00	5.00

Nota: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la investigación

Los datos presentados en la tabla permiten identificar un patrón consistente: mientras las estrategias de empoderamiento alcanzan niveles altos y estables entre las trabajadoras sociales, las dimensiones asociadas a la coordinación interinstitucional y, especialmente, a la disponibilidad de recursos muestran un desempeño considerablemente menor. Esta diferencia evidencia tanto la fortaleza profesional del equipo técnico como las limitaciones estructurales del sistema, constituyéndose en un punto crítico para comprender la brecha entre la intervención realizada y los resultados percibidos por las víctimas. Estas tendencias cuantitativas proporcionan la base para los análisis correlacionales e interpretaciones integradas que se desarrollan a continuación.

El análisis correlacional mediante Spearman mostró una relación positiva y significativa entre los años de experiencia profesional y la valoración que las trabajadoras sociales otorgan a la disponibilidad de recursos institucionales ($\rho = .38$, $p = .049$), lo que sugiere que quienes llevan más tiempo en el Sistema de Protección perciben con mayor claridad las limitaciones estructurales que condicionan su intervención. De igual manera, se identificó una correlación moderada entre los años de experiencia y la coordinación interinstitucional ($\rho = .41$, $p = .032$), indicando que la trayectoria laboral favorece una mejor comprensión de las dinámicas colaborativas entre instituciones. Por otro lado, la prueba U de Mann–Whitney permitió comparar las puntuaciones medias entre los grupos diferenciados por nivel de formación académica (pregrado vs. posgrado). Los resultados evidenciaron diferencias estadísticamente significativas en la percepción de impacto de las estrategias de empoderamiento ($U = 58.0$, $Z = -2.01$, $p = .044$, $r = .39$), de modo que las profesionales con formación de posgrado tienden a valorar más altamente la efectividad de estas estrategias dentro del proceso de atención a víctimas de violencia de género.

Estrategias de Empoderamiento: Discurso versus Realidad

Cuantitativamente, los trabajadores sociales reportan una aplicación consistente de estrategias de empoderamiento. El ítem "Brindar opciones y respetar decisiones" obtuvo una media de $M=4.5$ ($DE=0.7$), seguido de "Elaborar Planes de Seguridad" con $M=4.2$ ($DE=1.0$), lo que indica un fuerte compromiso profesional con la autonomía de la víctima. Sin embargo, la estrategia de "Promover autonomía económica" presentó una media significativamente menor ($M=3.2$, $DE=1.3$), señalando una brecha importante en la materialización del empoderamiento económico.

Estos datos se explican cualitativamente al contrastarlos con las narrativas de las víctimas. Por un lado, se evidencia el impacto positivo del enfoque centrado en la autonomía:

"La trabajadora social... siempre me decía que las decisiones eran mías... eso fue clave para sentirme empoderada" (Mujer 3). "Ese día sentí que volvía a tener el control... me ayudó a pensar en mí y en mis hijos" (Mujer 1).

No obstante, la promesa de autonomía se ve frecuentemente truncada por la falta de recursos. Múltiples víctimas relataron cómo la opción de acceder a un refugio, presentada como una ruta de protección clave, resultaba inaccesible en la práctica, generando frustración y desconfianza. Esta limitación cuantitativa en los recursos (ej. acceso a refugios, $M=2.8$, $DE=1.4$) socava cualitativamente la credibilidad del proceso de empoderamiento.

Coordinación Interinstitucional: Una Brecha Crítica entre la Intención y la Práctica

El estudio identifica una de las contradicciones más significativas: mientras el 80% de los trabajadores sociales encuestados considera la coordinación interinstitucional "prioritaria" o "muy prioritaria", su implementación es inconsistente. El uso de "Sistemas de información compartida" fue el ítem peor valorado ($M=2.5$, $DE=1.5$), y menos del 30% confirmó utilizarlos de manera regular.

Las entrevistas con las víctimas develan el costo humano de esta disfunción. Sus relatos están plagados de experiencias de revictimización burocrática:

"En el hospital me hacían repetir toda mi historia, era como revivir el dolor una y otra vez" (Mujer 1). "El área legal tardó mucho en responder" (Mujer 3). "Algunas funcionarias no entendían lo que significa depender del estatus migratorio del agresor" (Mujer 5).

Esta falta de articulación se ve agravada por barreras estructurales cuantificadas en las encuestas: la saturación de casos (seleccionada por el 65% de los profesionales) y las fallas en los sistemas de comunicación (seleccionada por el 85%) emergen como los principales obstáculos. La triangulación de datos sugiere así un ciclo de ineficacia: los profesionales, sobrecargados y con herramientas limitadas, no pueden ejecutar una coordinación efectiva, lo que perpetúa la desprotección y la desconfianza de las víctimas.

Percepción del Impacto y la Sombra de los Recursos Insuficientes

A pesar de los desafíos, tanto profesionales como víctimas perciben un impacto positivo de la intervención. La "Mejoría en la autonomía de la víctima para tomar decisiones" fue calificada con $M=4.5$ ($DE=0.8$) por los trabajadores sociales. Este dato se corporeiza en los testimonios:

"Hoy tengo un trabajo estable y manejo mis finanzas... volví a decidir por mí misma" (Mujer 3). "Ahora me siento más fuerte, ya no me dejo, puedo cuidar de mí y de mis hijos" (Mujer 2).

La discusión aquí debe destacar la resiliencia de las víctimas y la importancia crucial del vínculo terapéutico con el trabajador social. Sin embargo, este impacto positivo parece ser a pesar del sistema, más que gracias a él en su totalidad. El elemento habilitador clave que emerge de las propuestas de mejora de los profesionales y las víctimas es la necesidad de recursos concretos y accesibles: mayor presupuesto para refugios y apoyo económico, capacitación continua y protocolos unificados. La propuesta de "unificar protocolos" fue recurrente en ambos grupos, señalando una ruta clara para mejorar la coordinación.

Se identificó una relación estadísticamente significativa entre la disponibilidad de recursos institucionales y la efectividad percibida de las estrategias de empoderamiento. Las correlaciones de Spearman evidenciaron que el acceso a refugios y apoyos económicos mantiene una asociación positiva moderada con la autonomía decisional de las víctimas ($\rho = .46$, $p < .05$), mientras que la coordinación interinstitucional mostró una correlación más alta con la percepción de seguridad física ($\rho = .53$, $p < .01$). Para comprender la lógica de estos vínculos, se elaboró una matriz causal simple que revela un ciclo de dependencia estructural: (1) baja capacidad instalada \rightarrow (2) limitada coordinación efectiva \rightarrow (3) escasa protección material \rightarrow (4) debilitamiento del impacto del empoderamiento. Así, aunque las trabajadoras sociales implementan estrategias con alta frecuencia y compromiso profesional, su efecto transformador queda condicionado por fallas sistémicas que restringen la materialización de la autonomía y seguridad prometidas a las víctimas. Estos hallazgos confirman la hipótesis central: el empoderamiento no fracasa como enfoque, sino por la ausencia de los recursos que permitan operativizarlo plenamente en el Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la FGE.

DISCUSIÓN

Estos hallazgos dialogan críticamente con la literatura. Por un lado, confirman lo postulado por ONU Mujeres (2021) y Castañeda (2021) sobre la eficacia del empoderamiento y el enfoque centrado en la víctima. Por otro, exponen con crudeza la advertencia de la CEPAL (2023) sobre la brecha entre el marco legal avanzado de Ecuador y su implementación, un fenómeno que este estudio localiza en las dinámicas micro institucionales del SPAVT.

La triangulación metodológica permitió no solo identificar esta paradoja, sino seguridad de construirla: el empoderamiento no fracasa como filosofía de intervención, sino que se ve estrangulado por una arquitectura institucional fragmentada y con recursos insuficientes. La conclusión es ineludible: no basta con formar trabajadores sociales comprometidos con las estrategias de empoderamiento si el sistema no les provee de las herramientas, el tiempo y la infraestructura de coordinación necesarias para materializarlas. Las políticas públicas deben, por tanto, transitar de la retórica de la protección a la inversión concreta en los cimientos estructurales que la hacen posible.

REFERENCIAS

- Asamblea Nacional República del Ecuador. (2018). Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Registro Oficial Suplemento 175. https://www.igualdad.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/05/ley_prevenir_y_erradicar_violencia_mujeres.pdf
- Castañeda, P. (2021). Epistemologías feministas en el trabajo social contemporáneo. Editorial Universidad de Guadalajara.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2023). Violencia feminicida en América Latina. Naciones Unidas. <https://www.cepal.org/es>
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). Designing and conducting mixed methods research (3a ed.). SAGE Publications.
- Elboj, C., & Ruíz, L. (2010). Trabajo Social y prevención de la violencia de género. *Revista de Investigaciones e Intervención Social*, 1, 220-233.
- Fiscalía General del Estado (FGE). (2024). Informe anual de violencia de género. Quito. <https://www.fiscalia.gob.ec/fiscalia-especializada-en-violencia-de-genero/>
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (2024). Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género. Quito.
- Organización Mundial de la Salud (OMS). (2021). Violencia contra la mujer. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>
- Organización de las Naciones Unidas – ONU Mujeres. (2021). Empoderamiento económico de las mujeres y prevención de la violencia. Naciones Unidas. <https://www.unwomen.org/es/what-we-do/economic-empowerment>
- Richmond, M. (1922). Caso social individual. Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública. (Trabajo original publicado en 1917). <https://www.fhyce.edu.py/wp-content/uploads/2020/08/Caso-social-individual.pdf>
- Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). (2022). Informe de gestión interinstitucional en la atención a víctimas del conflicto armado en Colombia. Gobierno de Colombia. https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/informe-de-gestion-2022/
- Vizcaíno, P., Cedeño, R., & Maldonado, I. (2023). Metodología de la investigación científica: Guía práctica. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(4), 1-30. https://doi.org/10.37811/cl_rem.v7i4.7658